



Revista de Fomento Social, 48 (1993), 95-111

Andalucía 1982-92: rasgos económicos y sociopolíticos de un periodo decisivo

El triunfo del PSOE en las elecciones autonómicas andaluzas, antesala del triunfo a nivel nacional, ha dado lugar, a través de sucesivas victorias electorales, a una década de gobierno socialista en Andalucía. En este trabajo se realiza un estudio panorámico de la evolución que los tres sectores de la economía andaluza (primario, industrial y servicios) han experimentado en este lapso de tiempo, así como del proceso de centralización económica y política que se ha producido en torno a Sevilla, en detrimento, en opinión del profesor Cazorla, de otras provincias andaluzas. Finalmente se realiza una breve exposición de algunas actitudes sociopolíticas de los andaluces en el momento presente..

————— José CAZORLA PEREZ (*) —————

(*) Catedrático de la Universidad de Granada.

ESTUDIOS

1. Introducción

Cuando en mayo de 1982 se celebraron en Andalucía las elecciones autonómicas, el triunfo del PSOE se veía venir. No era preciso ser un experto en cuestiones electorales para advertir que el principal partido de la oposición al gobierno de UCD iba a ganar, y por amplia mayoría (de hecho 52,6 %), lo que le proporcionó 66 escaños en el primer Parlamento andaluz. La previsión se extendía más aún: las elecciones generales, que dada la situación, eran perceptibles a no muy largo plazo, fueron en efecto una victoria todavía más amplia del Partido Socialista, en octubre, con el 59,7 % de los votos. Se dio también la más alta participación en cualesquiera elecciones desde 1977 inclusive, hasta el presente, con el 78,6 % de los electores.

El predominio de este partido resultó tan grande en el conjunto del país, que en lo que cabría denominar su "periodo triunfal" (1983-86), llegó a disponer del 58 % de los escaños del Congreso de Diputados, la mayoría en 13 de los 17 Parlamentos autonómicos, y casi las tres cuartas partes del total de concejales de las localidades de más de 20.000 habitantes, los cuales representaban a nivel municipal a bastante más de la mitad de la población española.

En este extraordinario "record" operó no sólo una imagen y una estrategia perfectamente preparadas por el PSOE, sino también la debilidad de sus oponentes. UCD estaba en quiebra, y AP tenía escaso arraigo en Andalucía, en donde la izquierda ya había obtenido la mayoría absoluta en febrero de 1936.

2. Programas políticos y realidades económicas

Entre los principales puntos del programa que llevó al PSOE a la victoria en 1982, se encontraban los siguientes: creación y funcionamiento del Consejo Económico y Social, creación de 800.000 puestos de trabajo en los primeros cuatro años de mandato, reestructuración del crédito oficial, reorganización de empresas del sector público, reducción del programa nuclear, control de precios en productos básicos, duplicación de la aportación del Estado a la Seguridad Social, jubilación a los 64 años, reformas en las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, desvinculación de la estructura militar de la OTAN, regulación del juicio por jurado, cambios en la legislación educativa, y despenalización del aborto. También se preveía el completar las transferencias a las CC.AA., trasladar funcionarios a estas sin que aumentase su número (evitando el aumento de gasto público), y reducir a "cifras razonables" los 1.300 cuerpos y escalas existentes en las Administraciones públicas.

Esta somera enumeración sirve aquí como recordatorio, una década después, de cuántos de estos puntos básicos se han cumplido. Pero algunos de ellos requieren además un mínimo comentario. Ante todo, es preciso señalar que el PSOE llegó al

poder en un difícil momento económico, y que sólo a partir de 1986 y hasta 1991 inclusive se apreció una clara recuperación en casi todos los sectores de la economía nacional, para volver a entrar en crisis en el segundo semestre de 1992 (aunque ya se percibían signos de desactivación en 1991).

Refiriéndonos preferentemente a Andalucía, y comenzando por el sector primario, el "pacto andaluz por el agua" que el presidente Chaves anunció en 1991, sigue sin realizarse, lo que resulta particularmente llamativo en un periodo de sequía como el que ha caracterizado los primeros nueve meses de 1992. Al cabo de varios años de tentativas desgastadas, la reforma agraria, más simbólica que real, ha quedado en vía muerta, y se calcula que en el campo andaluz se perderán unos 300.000 empleos a plazo medio. Todavía a finales del siglo XX, el 80 % de las explotaciones siguen siendo inferiores a 10 hectáreas y representan solo el 10 % de la superficie cultivada, frente al hecho de que el 5 % de ellas superan las 50 hectáreas y suponen el 70 % de aquélla. Es difícil, sobre esta base tan desigual establecer una política regional agraria competitiva, frente a la mayoría de los productos que -bien comercializados y distribuidos además- nos introduce la CE.

No se ha acometido pues una solución definitiva a los endémicos problemas del desempleo agrario. Para ello hubiese sido precisa la creación de empresas y cooperativas, agrarias o de tipo mixto, que absorbieran a los parados, sobre todo los jóvenes. Lo que se ha hecho ha sido simplemente subvencionar el paro, en forma directa o a través del PER, lo que ha originado frecuentes bolsas de fraude, que además perjudican a los auténticos desempleados. El problema del abuso de unos junto a la insuficiencia económica de otros, ha desembocado en los juzgados, al no haber voluntad en ciertas autoridades municipales (ni en otras de "más arriba") para distinguir entre quienes verdaderamente carecían de recursos y quienes se aprovechaban de los fondos públicos. La economía de buena parte del medio rural andaluz se ha basado en los últimos años en una mezcla de actividades tradicionales junto al uso de subvenciones, canalizadas a través de los Ayuntamientos, las cuales conferían al partido dominante en estos -generalmente el partido socialista- una capacidad de presión sobre los electores, que sobre todo en el último quinquenio, ha demostrado ser allí mucho más eficaz que en las ciudades. El fundamento era lógico: a menos recursos de empleo, más capacidad de manipulación del electorado. Fenómeno que, dicho sea de paso, no es desconocido en Grecia, Portugal, ni en el Sur de Italia (Cazorla, 1992). Como se ha señalado recientemente (García Sanz y Martínez Paricio, 1992), si bien es cierto que la mentalidad predominante en nuestro medio rural se resiste al cambio, también tiende a apoyar cualquier opción que tenga buenas probabilidades de alcanzar el poder en forma mayoritaria; en definitiva, las ideologías de los campesinos son relativamente permanentes, pero sus estrategias políticas cambian de acuerdo con sus intereses de cada momento.

En particular, las industrias agroalimentarias, que hubieran podido ser un importante motor de cambio, en lugar de aumentar están disminuyendo en la región, como demuestran trabajos recientes de Delgado Cabeza (1992). Por el contrario, la política de construcción de embalses, detenida durante algún tiempo por la escasez de fondos que se habían desviado a mejoras viarias, parece que tiende a reactivarse.

Volviendo al preocupante tema del desempleo, a finales de 1987 se alcanzó el máximo histórico en Andalucía, con casi tres cuartos de millón de parados en todos los sectores (30,8 % de la población activa, Ferraro, 1992). Desde hace años, nuestra región ostenta el poco grato "record" de la mayor cifra de paro de todas las regiones de la CE. Esta cifra ha disminuido algo recientemente, pero se viene manteniendo siempre por encima de la cuarta parte de la población activa, si bien es difícil determinar en qué medida una fracción de ella es -como antes hemos apuntado- de origen fraudulento. Ultimamente, algunas medidas gubernativas están encaminadas a controlar y reducir este abuso.

De modo paulatino se ha ido produciendo, sobre todo desde 1985, un cierto crecimiento del sector industrial, que lucha contra los efectos de la desaparición de las barreras normativas, fiscales y técnicas que hasta ahora preservaban de la competencia europea al mercado interior español. La entrada de capital no andaluz en empresas de la importancia de Sevillana o Cruz-Campo "es significativa del proceso de reforma en que se encuentra el sector industrial andaluz" (Aurioles, 1992). Pero la conclusión a que se llega (Martín Armario y otros, 1992), es que "Andalucía se encuentra en una peor situación relativa (frente a esta competencia) que la media de las regiones atrasadas de España y la CE". Así, actúan las limitaciones a las subvenciones al sector naval, equipos de telecomunicación, reglamentaciones favorables a producción de fertilizantes, energía, plásticos y alimentos, etc. De hecho, la reactivación industrial a que nos referimos ha dependido en buena parte del "boom" de la construcción al que ahora mencionaremos, al proveerlo de muchos de sus materiales básicos. Parece poco dudoso que la recesión iniciada en 1992 afectará lógicamente a este sector, aparte de la más fácil penetración de productos procedentes de los países más industrializados de la CE desde el 1 de enero de 1993.

En el segundo semestre de 1992 se han apreciado síntomas claros a este respecto, que afectan en especial a la siderurgia y a empresas estatales con presencia en la región, como químicas, CASA y Santa Bárbara. Lo que a pesar de todo aparece con claridad en el panorama industrial andaluz, es el decidido propósito de concentración en el triángulo Málaga-Sevilla-Cádiz (con cierto detrimento de Huelva) y en algunos espacios intermedios (Campo de Gibraltar, Bajo Guadalquivir y Campiña de Antequera) (Aurioles, cit.).

En los primeros días de Noviembre de 1992 se celebra en Granada una Conferencia Aeroespacial Europea, que lógicamente acoge la tecnología industrial más avanzada

del planeta. Por elogiable que sea esta iniciativa, no deja de resultar paradójico que la ciudad con menos capacidad industrial de Andalucía, y una de las que menos en España, sea ahora sede de este Congreso. Ojalá esta reunión incite a empresas regionales, nacionales o extranjeras a invertir en la que hasta el momento se asemeja más a una capital iberoamericana, que a una de la CE en cuanto a sus características productivas.

Según el Informe de ESECA (1990), las ventajas competitivas que podría tener Andalucía en determinados sectores, como agricultura y alimentación, química y plásticos, textil y confección, manufacturas de madera y de metales, se están perdiendo rápidamente frente a empresas del exterior. La única actividad creciente es la de material de transporte, pero se concluye que hay "una clara señal de falta de lazos entre las principales actividades productivas de la economía andaluza". No se puede olvidar -añade dicho Informe- que quienes compiten no son las regiones como tales, sino las empresas que conforman su tejido productivo.

Como ha dicho López de la O (1992), "Andalucía no puede competir en la atracción de empresas que difundan las nuevas tecnologías productivas con criterios basados en la accesibilidad de recursos básicos o en los bajos costes de instalación u otros. Con este planteamiento se encuentran numerosas regiones dentro del ámbito comunitario y muchas más fuera de él. La única alternativa viable es la de construir un marco creador en aquellos sectores en los que la región pueda efectivamente competir". El problema, pues, como vemos es que estamos perdiendo competitividad en casi todos los sectores.

Por otra parte, nadie duda de que el sector de la construcción ha sido desde 1985 el más dinámico -con mucho- de la economía andaluza (del 8,4 % del PIB en 1985 al 11,3 en 1990, Ferraro, cit.). En este crecimiento han tenido un papel decisivo los proyectos de grandes infraestructuras impulsados por las Administraciones Públicas. Destacan sobre todo las construcciones originadas por la Expo 92, una larga serie de edificios de uso público, y la red de autovías, a que nos referiremos con mayor detalle después. Por el contrario, el número de viviendas de protección oficial se redujo en beneficio del de viviendas libres, aunque la tendencia se está invirtiendo nuevamente desde 1990. Desde el primer semestre de 1992 han disminuido en forma espectacular las obras públicas, en unos casos por haberse completado los proyectos, y en otros por quedar ralentizadas o suspendidas ante el creciente endeudamiento y la falta de liquidez de las Administraciones Públicas.

En cuanto al sector servicios, representa el de mayor importancia de la economía andaluza, nada menos que con un 57,2 % del PIB regional, pero tradicionalmente con muy escasa diversificación en particular distribuida entre servicios públicos, comerciales y turísticos, lo que tiende a concentrarlos en centros urbanos (o con predominio de actividades urbano-terciarias, en el caso del turismo). Este último origina grandes

vaivenes estacionales en la oferta de empleo, la cual -como es sabido- disminuye mucho durante seis o siete meses. Incluso cabría juzgar que los incentivos oficiales - a veces con importantes cantidades a fondo perdido- ofrecidos a la inversión en construcción de hospedajes durante los cuatro o cinco últimos años, han producido un exceso de oferta que podría desembocar en el cierre de algunos establecimientos, además de la pérdida de las inversiones.

Un aspecto positivo, aparte del movimiento turístico sin precedentes que ha provocado la Expo 92, a que nos referiremos después, es la promoción de Sierra Nevada con motivo de los Campeonatos Mundiales de Esquí Alpino en 1993, y que permitirán un apreciable conjunto de mejoras en la infraestructura de la provincia, tan necesitada de ellas.

Es evidente en fin, que el sector terciario andaluz (caso en modo alguno único en España), no sólo se apoya excesivamente en el turismo, sino que carece de una tradición industrial previa y complementaria que en cualesquiera circunstancias sería muy útil a la economía regional, evitando sus desequilibrios. En un reciente trabajo (Rodríguez y Marchena, 1992), se reconoce una serie de defectos en la oferta turística andaluza, especialmente bajo la forma de gestión deficiente, minifundismo empresarial y pérdida de competitividad, mala comercialización, excesivo control de "touroperadores", "dumping" de precios, falta de coordinación de la política turística, y escaso nivel de formación de los recursos humanos.

La contaminación de las aguas litorales perjudica a muchas playas de la costa andaluza, lo que repercute no sólo en cuanto impacto ambiental sino económico. No se pueden ofrecer servicios turísticos de elevado precio -y ante una dura competencia exterior- si su entorno no responde a un nivel siquiera mínimo de calidad. En este sentido los vertidos de las industrias papeleras (de propiedad estatal), de Huelva y Motril son un ejemplo de lo que no puede tolerarse a estas alturas del siglo XX.

Pero esta contaminación se extiende también al entorno de comarcas del interior. Datos muy recientes indican por ejemplo que mientras la provincia de Córdoba apenas sufre tales problemas, muchos municipios rurales de Granada, se limitan a tirar a las cunetas sus desperdicios, con consecuencias simplemente calificables de tercermundistas. La actuación de los respectivos Ayuntamientos y Diputaciones merece por consiguiente calificativos bien distintos. Pese al escaso volumen de la producción industrial andaluza, resulta que también los ríos y acequias de la región presentan paradójicamente un alto índice de contaminación. Procede esta de residuos urbanos y en especial de vertidos incontrolados de los que son principalmente responsables las empresas de molturación de aceitunas.

Sin entrar en mayor detalle, por lo menos debe mencionarse el grave problema de desertización con que se enfrenta la región, en mayor medida que cualquier otra de Europa occidental. El Plan Forestal que se ha elaborado tiene un plazo de aplicación

de 60 años. De él cabe esperar consecuencias muy beneficiosas, si se implementa con suficiente eficacia lo más pronto posible.

Por otro lado, casi todos los servicios profesionales cualificados (especialistas en diversas técnicas, sanidad, empresas, ocio), se concentran en los centros urbanos, lo que empobrece por inevitable compensación al medio rural andaluz, obligando a sus habitantes a acudir una y otra vez a aquéllos.

Mención particular es preciso hacer de las comunicaciones andaluzas. En el capítulo de carreteras, la mejora ha sido extraordinaria, en proporción -por una vez- a las necesidades de la región. Se ha pasado de sólo los trayectos Sevilla-Cádiz por autopista, y Málaga-Estepona por doble carril, a casi 1.500 Km. de autovía. Cuando se completen (hacia 1995-96) las conexiones Baza-Puerto Lumbreras, Bailén-Motril, Antequera-Córdoba, y más tarde Málaga-Almería, se podrá circular desde Escandinavia a Algeciras por autovía o autopista sin interrupción. Aunque ha habido críticas, sobre todo a la realización de la autovía Sevilla-Baza, en base a que "la A-92 integra hacia fuera y no hacia dentro... incrementando el predominio urbano" (Márquez Guerrero, 1991), la verdad es que esta comunicación de superficie se hacía indispensable. No se puede decir lo mismo de la situación de las comunicaciones ferroviarias, que paradójicamente han contribuido a incrementar una inadmisibile desigualdad entre una zona privilegiada de Andalucía y el resto. Nos referimos, como es evidente, a la costosa construcción del nuevo trayecto en Alta Velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla, cuyo precio ha alcanzado una cifra próxima a los 500.000 millones de ptas. Comentarios de expertos, han señalado en la prensa que por ese precio se hubiera podido modernizar la totalidad de la red ferroviaria española. Pero aun contemplando en exclusiva los intereses de Andalucía -tantas veces ignorados- lo que no se puede hacer es confundirlos con la mejora de acceso ferroviario de sólo dos ciudades. Si durante el periodo de apertura de la Expo posiblemente ha sido rentable este servicio, es más que dudoso que desde su cierre lo sea. Y ello, calculando solo los gastos de explotación, no ya los de amortización de la nueva línea, que desde un principio se han considerado a fondo perdido. Al mismo tiempo, el contraste se hace mayor cuando hace años se cerró por falta de rentabilidad la línea Andalucía-Levante (por Murcia), y actualmente se habla de clausurar igualmente las de Granada y Almería con Baeza y Huelva con Zafra. Siguiendo el mismo razonamiento, habría que cerrar también la recién inaugurada del AVE. Pero como se ha dicho en algún comentario de prensa, "hay una Andalucía a dos velocidades".

En estrecha conexión con este problema se encuentra el de los gastos realizados con motivo de la Expo 92. Resulta perfectamente comprensible que se quisiera hacer coincidir, con motivo del V Centenario, los Juegos Olímpicos de Barcelona con la Exposición Universal. Pero el costo de ésta se disparó (al igual que el del AVE) por la urgencia en terminar con poco tiempo y a plazo fijo las costosas obras de

infraestructura y edificaciones. Un arquitecto llegó a decir que a medida que se aproximaba la apertura, cada lunes los contratistas exigían más dinero por la obra contratada, lo que puso a algunas de ellas en una cifra muchas veces superior a la original.

Más aún, una vez terminada la muestra, la impresión es que una buena parte del suelo tecnológicamente mejor dotado de Europa, va a ser infrautilizado. Para paliar el hecho de que la atracción de turismo extranjero ha sido mucho menor de lo previsto (no ha llegado a un tercio de los visitantes), se ha jugado con la cifra de casi 42 millones de visitas. Pero no de visitantes (que han sido unos 15,5 millones), porque muchos habitantes del entorno de la Expo, con pases de temporada, entraron al recinto un promedio de 60 veces (o sea a unas 200 ptas por vez). Cantidad muy módica si tenemos en cuenta que a cambio de ella disponían de un espectáculo sin igual en el mundo.

3. Las decisiones políticas y sus consecuencias

Desde el punto de vista publicitario (e incluso de interés político de España), la repercusión de los Juegos Olímpicos fue mucho mayor. A pesar de todo, se podría dar por bien empleada la gigantesca cifra (quizá próxima al billón de ptas) gastada en la Expo, si no supiéramos que una parte apreciable de ella se ha despilfarrado y a veces "desviado". La valoración de las transferencias a "Cartuja 93", permite toda clase de juegos de cifras, que al final resultan imposibles de comprobar en cuanto a la verdadera rentabilidad económica de la Expo, ya que la publicitaria, como decimos, no ha sido muy grande.

Lo peor de todo esto es que en los próximos años Andalucía va a encontrar dificultades a la hora de recibir inversiones del Estado, y más aún en un trance de escasez generalizada en la CE. Otras regiones están ya alegando que las precisan con similares motivos (por ejemplo, para reindustrializaciones), y que Andalucía ya consumió su turno. Cuando la verdad es que -aparte la red viaria- siete provincias de la región han tocado a bastante poco con motivo de los fastos del 92. Los andaluces son conscientes de ello, y prescindiendo de frecuentes comentarios en los medios de comunicación, sucesivas encuestas del CIS y otras entidades han venido dando repetidamente cifras de más del 80 % de los entrevistados, que afirmaban que la provincia más beneficiada con motivo de las conmemoraciones del 92 era Sevilla.

No sólo han contribuido al auge de esta ciudad (en proporción bastante superior a la de su provincia), los acontecimientos reseñados, sino en forma menos coyuntural, y desde hace aproximadamente una década, las consecuencias económicas y políticas de su capitalidad regional.

A partir de comienzos de los años 80, y luego, especialmente con motivo de la incorporación de España en 1986 a la CE, se ha registrado una clara aceleración del

proceso de traslado de decisiones hacia centros de poder comunitarios -en particular Bruselas y en menor medida Bonn- o económicos, como Nueva York. Se ha llegado a decir, -en forma algo exagerada, pero con cierto fundamento de hecho- que la aplicación de la Constitución española está siendo modificada sustancialmente a través de meras directivas de la CE. Por otro lado, ciudades que hasta no hace mucho eran centro de producción y de poder político (como por ejemplo Bilbao), han perdido gran parte de este último, que ni siquiera se ha trasladado a Madrid, sino más allá de nuestras fronteras. Una cosa es que el proceso sea inevitable y otra que por lo menos se mencione.

Pero curioso es que en el caso de Sevilla ha sucedido lo contrario. Hasta 1982 no tenía más importancia política (aunque sí económica, Cazorla, 1984), que cualquier otra capital andaluza. Pero al absorber la presencia del Consejo de Gobierno y Parlamento regionales, se ha producido una considerable concentración de la Administración en aquella ciudad, cuya economía, en forma sustancial, ha quedado mucho más condicionada que antes por las aportaciones directas o indirectas de las Administraciones públicas. Lo que lógicamente repercute en el efecto multiplicador de las economías privadas. El proceso exactamente opuesto se ha producido en Granada, hasta entonces de hecho centro subregional de Andalucía Oriental, que ha perdido todo protagonismo, con la consiguiente repercusión económica negativa. La simbólica -pero no compensatoria- decisión de que la sede del Tribunal Superior de Justicia se ubicase en Granada, quedó muy disminuida en virtud de una votación sorpresa del Senado, que fijó en Sevilla y Málaga salas de dicho Tribunal. Consecuencia obvia fue la pérdida de competencias de éste en su sede original, en favor de aquéllas. Es de elogiar que la deseable descentralización se aplicase a la ubicación del poder judicial en Andalucía, pero resulta curioso que en modo alguno lo fuese a las instituciones radicadas en Sevilla.

El hecho es que Sevilla ha unido a su anterior predominio económico el político, y las fuertes inversiones realizadas en sus infraestructuras le confieren un predominio absoluto en la Comunidad, que estimamos coincide sólo parcialmente con el espíritu que animó a los redactores de la Constitución. Cabría decir en este contexto, que *Andalucía es bastante más que Sevilla, pero ha sido tratada como si fuese bastante menos*. Frente a la descentralización política nacional, la interpretación que se le ha dado en Andalucía ha sido la de concentración regional. Lo peor de todo es que ni Granada, ni su antigua zona de influencia (Jaén y Almería), han obtenido compensación alguna, económica o administrativa, de lo perdido, y no por casualidad constituyen actualmente una de las zonas más deprimidas del país, como después comprobaremos.

En cuanto a la situación de las finanzas públicas de la región, desde el punto de vista de la disponibilidad de fondos fue bastante bien, incrementándose por encima incluso

de la media nacional en el periodo 1985-91. Pero la participación de la Comunidad en los gastos originados por la Expo, el AVE, la red de autovías y los edificios públicos construidos con motivo -más o menos- de las conmemoraciones del 92, sin un suficiente respaldo del Estado, que a su vez, se excedió en estos y otros gastos, han provocado una situación de falta de liquidez y de fuerte incremento de la deuda pública. Desde septiembre del 92 ello -unido a las dificultades de otras economías, como la alemana y la británica- ha repercutido en un presupuesto fuertemente restrictivo para 1993, que -como de costumbre- afectará en mayor medida a las comarcas más pobres. De manera que cuando hubo abundancia de fondos se dijo a las provincias más marginadas que había otras prioridades, y cuando estos se han acabado, hay que esperar. Esta situación no es nueva para las provincias más orientales de Andalucía en particular, porque viene repitiéndose desde hace décadas.

Debe señalarse que ante el Parlamento de Andalucía, los grupos de oposición han denunciado deudas de la CA que -dicen- podrían llegar a varios cientos de miles de millones de ptas. Según noticias de prensa, "sólo los intereses que generan los sucesivos aplazamientos del pago de la deuda pública a lo largo de los últimos años equivalen a los presupuestos de las Consejerías de Educación, Trabajo y Asuntos Sociales". La oposición ha dicho que "la política de la Administración Central es la de transferir la deuda central a las periféricas", denunciando además la falta de control de los presupuestos. El partido en el poder ha reconocido que el débito de la Junta "sólo" asciende a unos 330.000 millones de ptas, concentrados en particular en Servicios de Salud y Obras Públicas (*Actualidad Andaluza*, núm.3, octubre 1992).

El hecho es que las decisiones de carácter político -casi siempre previas a las de índole económica- han producido *dos Andalucías muy diferentes, desde los puntos de vista provincial, comarcal, sectorial y social*.

Al analizar como se distribuye el PIB regional por habitante en la Comunidad Económica Europea, se constata con toda claridad un "arco" mediterráneo que se extiende desde la región de Roma, pasa por la costa francesa y llega hasta Alicante inclusive, cuyos niveles de renta son bastante similares situándose entre el 72 % y 128 % del PIB comunitario medio por habitante en 1990 (Cordero Mestanza, 1992). Por otro lado, al estudiar respecto del Estado español el crecimiento del PIB por comunidades autónomas (Alcaide Inchausti, 1992) se observa como Andalucía y Extremadura han tenido un crecimiento medio del PIB similar al nacional entre 1986-1991, pero todavía se encuentran por debajo del 75 % de éste.

Aunque en el periodo 1986-1991 el porcentaje de variación de la renta regional andaluza ha sido algo más alto que la media del país (5,11 % frente a una media nacional del 4,99 %, según Alcaide Inchausti, cit.), Andalucía y Extremadura siguen estando en la cola de las rentas familiares disponibles en el conjunto de las regiones de aquel. En concreto, Andalucía tenía en 1991 (sobre una base nacional media de

100), un PIB de 70'4, y en comparación con la media de la CE, de 55,7. Este índice mejoró en el periodo 1985-91 en un porcentaje de convergencia del 7,8 (frente a un 9,2 del nacional). Baleares, Cataluña y Madrid superaban ligeramente el índice 100 de la media comunitaria. Dicho de otro modo, aunque las "distancias" entre las regiones más ricas y más pobres del país siguen siendo de algo más del doble en este indicador, se aprecia en los últimos seis años una paulatina aproximación entre ellas.

Decimos que Andalucía y Extremadura, desde hace décadas, se encuentran en el extremo inferior del "ranking" económico y social de las CCAA del país. Ahora bien, si aislamos los datos de Almería, Granada y Jaén, observamos que *son estas tres provincias más Huelva las que sirven de rémora a los indicadores del conjunto andaluz*, encontrándose en 1981 y nuevamente en 1986 entre las diez últimas del conjunto nacional en el índice de "nivel medio de vida" (INE, 1991). Este índice acumula quince datos diferentes (paro, estudios, viviendas, gasto de los hogares, morbilidad y otros significativos). Es decir, que las otras cuatro provincias (Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla) se encuentran en posición ciertamente por debajo de la media nacional, pero bastante más favorable que las antes citadas. En concreto, como es sabido, sólo Málaga y Sevilla alcanzan conjuntamente el 40 % de la producción total andaluza.

A este respecto, y como muestra de una situación más generalizable, un político en el poder ha dicho recientemente que "Granada recibe de la Administración tres veces más de lo que produce". Tal vez sea cierto, y es probable que la ausencia en la provincia (con alguna excepción) de una clase empresarial con iniciativa y dispuesta a asumir riesgos sea responsable en parte del problema. Pero no es menos cierto que si se despoja a la ciudad de recursos como los que representaba el personal de las Administraciones públicas (un 35 % de su población activa), al perderse o trasladarse centros de decisión, y no se estimulan desde el Estado o la CA acciones especiales que sustituyan o complementen la escasa iniciativa empresarial, la ciudad y la provincia continuarán en un torpor secular del que por sí solas es difícil que salgan. Algo similar se puede decir de las otras provincias andaluzas situadas en los últimos lugares del "ranking" mencionado. No es casual que en una reciente encuesta (*Andalucía Actualidad*, núm. 1, octubre 92), *los más altos porcentajes de descontentos con las instituciones públicas por las que se preguntaba (Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno) correspondiesen precisamente a los granadinos*. También estos eran los menos optimistas (56 %) entre los andaluces frente a las demás provincias, sobre todo Sevilla (90 %). La situación económica de Granada no da pie a demasiadas ilusiones, y ello se refleja en estas actitudes.

Esta apreciación se confirma si se estudia la dinámica demográfica (Calvo y otros, 1992) ya que se ve muy bien la concentración de la población en la costa de Levante y Sur y en Madrid, pero interrumpiéndose en el litoral de Granada. La única

concentración de la provincia se produce en torno a esta capital, fuente casi única de empleo. En las demás provincias andaluzas, la dispersión es mayor.

Otro tanto sucede al analizar la ubicación de las comarcas deprimidas (Mella Márquez, 1992). Entonces se percibe cómo en la mitad Sur de la Península, son sobre todo Granada y Almería las provincias en que la mayor parte de su superficie está ocupada por tales comarcas. En el conjunto de la región -y en mayor proporción en dichas provincias- la situación de pobreza afecta a unas 650.000 personas, lo que representa un 14 % del total nacional. Se trata fundamentalmente de desempleados o temporeros, campesinos de zonas de montaña, jóvenes parados de los suburbios, jubilados y pensionistas, - y más recientemente- inmigrantes africanos. Como en otros países europeos, estos últimos están constituyendo un subproletariado al que se explota en forma inhumana en ventas a comisión o ciertos cultivos, y viven en situación comparativamente mucho peor que la que los emigrantes españoles soporaron en Centroeuropa hasta no hace muchos años.

Si analizamos los estratos en que cabría dividir la población de Andalucía con arreglo a sus respectivas rentas (tabla 1), se observa que subsisten considerables diferencias entre el volumen de ingresos y el total de personas a que corresponden. Mientras un 8,8 % de los andaluces se reparte el 31,5 % de los ingresos, en el extremo opuesto, el 10,6 % más pobre sólo obtiene un 2,4 % de éstos. Sin duda, las clases medias han crecido con respecto a su proporción de hace sólo dos décadas, pero también es cierto que la desigualdad sigue siendo muy considerable y mayor que en otras regiones del país salvo -de nuevo- Extremadura.

TABLA 1. Proporciones población-renta en Andalucía (Finales de los 80)

	<i>Población %</i>	<i>Renta %</i>
1	8,8	31,5
2	19	25,3
3	35,8	28,7
4	25,8	10,1
5	10,6	2,4

Fuente: EDIS

En definitiva, desde cualquier ángulo que se mire, aparecen una y otra vez dos culturas, dos economías, dos grupos sociales diferenciables, en suma, dos Andalucías: por un lado, la de las ciudades y la Costa, la de los profesionales y técnicos, la que tiene un nivel económico no muy lejano al medio europeo. Por otro lado, la Andalucía rural,

de las zonas de montaña, a menudo árida, en creciente despoblación, con bajos niveles de consumo y producción, que subsiste en virtud de una economía mixta de subvenciones de la Administración y actividades tradicionales. Con todos los condicionamientos que se quieran, la primera es más visible en la zona central y occidental; la segunda, en las provincias más orientales.

4. Algunas actitudes sociopolíticas

Como hemos dicho, el triunfo del PSOE en 1982 en las elecciones autonómicas de Andalucía, con millón y medio de votos, precedió al de este partido en octubre de aquel año en las generales del país, con casi diez millones de votos. En los últimos comicios celebrados en Andalucía (municipales), los sufragios favorables al PSOE fueron aproximadamente 1.400.000, lo que supuso un 45,2 por ciento de los computados. Es decir, no se advierte en la región una disminución significativa en el apoyo electoral al partido socialista, al cabo de diez años de gobierno, al contrario de lo que sucede en el conjunto de España, especialmente en algunas grandes ciudades, como anteriormente hemos comentado (véase Cazorla y Montabes, 1991).

En este sentido no puede olvidarse que, aparte la vieja tradición de apoyo mayoritario a la izquierda procedente en Andalucía por lo menos desde la II República, el PSOE ha consolidado en esta década una extensa implantación en toda la región, hasta sus últimos rincones, en mucho mayor grado que cualquier otro partido. Precisamente en tales zonas (por ejemplo comarcas rurales de Jaén), es donde se observa una mayor proporción de votos favorables al Partido socialista, en una evolución en cierto modo inversa a la importancia de la población, respecto a la que tuvo en los primeros tiempos de la transición. En todo caso, el desgaste que en este último año puede haber sufrido el PSOE en Andalucía, especialmente por los efectos sobre algunos electores de las acusaciones que se han vertido sobre ciertos dirigentes⁽¹⁾, se traducirá en las próximas elecciones en quizás un cierto aumento de la abstención y/o del voto a IU-CA. Pero no parece que vaya a reforzar mucho a los partidos de derecha en Andalucía. Lo que sí se aprecia es una bastante generalizada desilusión -no sólo en Andalucía, y coincidente también con la actual crisis económi-

⁽¹⁾ Véanse por ejemplo estas palabras dichas por Alfonso Guerra en 1983 "La corrupción genera corruptela, y la práctica de la inmoralidad genera relajación en la concepción de la moralidad de la gente. Aquí el descrédito de la actividad política ha sido muy grande y está muy justificado. ¿Cómo se puede acabar con ello? Por puro crédito popular. Entre todos tenemos que sufrir una cierta catarsis de ser inflexibles e intolerantes con la gente que no respeta la norma de la dignidad y la honradez, y la decencia, porque todo está muy relajado... Nosotros estamos en contra de utilizar los cargos públicos para enriquecerse. Pero es que aunque no estuviéramos, que lo estamos, no sabríamos hacerlo. Somos personas decentes... Nosotros somos otra gente".

ca- respecto a las instituciones, los políticos, y sobre todo las formaciones políticas, en comparación con las actitudes que se percibían hace una década.

También puede haber influido algo el talante personal del Presidente de la Junta de Andalucía, frente al de sus antecesores, quienes tal vez con mayor frecuencia marcaron distancias con relación a la directrices procedentes de la ejecutiva del PSOE. El hecho de que en una reciente encuesta nacional, reseñada en la prensa, al calificarse diferentes personalidades políticas, ni siquiera el propio Felipe González alcanzase la calificación de "aprobado" (quedó con 4,7 puntos, y los demás, aún peor), puede ser significativo de la mencionada desilusión o, si queremos, desgaste.

En diversos sondeos de opinión, y desde hace algún tiempo, los españoles declaran (en proporciones superiores al 80 %) que les interesa muy poco o nada la política. Los andaluces no son excepción en este desinterés, correspondiente al escaso grado de movilización que caracteriza a nuestra sociedad precisamente desde 1982, cuando terminó la transición. La más reciente encuesta efectuada en Andalucía (*Andalucía Actualidad*, núm. 1, cit., realizada por "Sigma 2" en septiembre de 1992), indica que un 77 % se declaran "demócratas" en esta región, y algo más "nacionalistas" los varones (61 %), que las mujeres (40 %). Preciso es advertir que este concepto puede tener diferentes interpretaciones en Andalucía, con respecto a las que se le da en el País Vasco o Cataluña, por ejemplo.

Como problema principal de la región aparece invariablemente el desempleo, desde que hace ya 25 años preguntamos por primera vez en tomo al tema. También en los últimos diez años aparece en segundo lugar la drogadicción, y en tercero, los problemas de la sanidad pública, los cuales recientemente han sustituido a los de seguridad ciudadana, que pasan a cuarto lugar. Es también de notar la creciente preocupación en Andalucía por la corrupción, que por primera vez asciende al quinto lugar. Sería deseable disponer de datos contrastables sobre este tema, que procedieran de fuentes científicas más fiables que las únicas con que se cuenta.

El momento actual de la Comunidad Autónoma se contempla con bastante pesimismo (34 % "negativo", 52 % "regular" y sólo 12 % "positivo"). Las personas más críticas son las comprendidas entre 30 y 44 años, destacando Málaga, Huelva y Granada en este aspecto. Más de la mitad de los entrevistados (53,4 %), creen que Andalucía está peor que el resto del país, un 31 % la considera en la misma situación que el resto y sólo un 9 % piensa que está mejor. En general, son más pesimistas los habitantes de las localidades de más de 100.000, cosa que llama la atención porque - aparte los problemas urbanos- por lo regular disponen de más y mejores servicios que en el medio rural. Lo que sin duda opera aquí es su nivel de expectativas, también más alto que el de los campesinos, y que les hace por tanto mostrarse más descontentos.

Aparte las observaciones hechas anteriormente sobre algunas instituciones, está claro que para los andaluces (en coincidencia con la media española), la mejor

valorada es la Iglesia, seguida por el Ayuntamiento. Aparece un desconocimiento bastante generalizado respecto a las funciones ejercidas por las Diputaciones provinciales, probablemente por no percibir la mayoría de los ciudadanos los límites entre la actuación de tales entidades y sus propios Ayuntamientos, con los que por proximidad se sienten más familiarizados. En cuanto a la Junta de Andalucía, se la valora con un promedio ligeramente negativo (aunque en diversas encuestas se suele apreciar su actuación en la década).

El Gobierno queda algo más atrás en tal valoración, lo que en cierto modo es paradójico, dada la reiteración de mayorías favorables al del PSOE en este intervalo. Probablemente sigue operando el factor que ya mencionamos en otro momento (Cazorla, 1989), es decir, su profunda implantación, y "la escasa capacidad de convencimiento de sus contrarios a la hora de presentarse como alternativa... lo que (por ahora impide contemplarlos) como potencialmente mejores para responder a las expectativas de desarrollo que comparte la mayoría de la población andaluza".

Estrechamente conectados con este aspecto se encuentran -en fin- los partidos políticos, que desde hace años ocupan en la encuesta que comentamos, y en otras muchas, el último lugar en el aprecio de la población en cuanto instituciones. No ha lugar a entrar aquí en un tema que -por su causalidad- se aleja de nuestro presente propósito, pero del que hemos hecho ya algunas referencias.

Terminaré con una manifestación de fe, en un momento de dificultad, pero no de desesperanza. Andalucía, como tal, y su zona más oriental en particular, tienen posibilidades humanas, recursos naturales y capacidad económica potencial, para que no esté justificado su alejamiento de los promedios sociales y económicos de la Comunidad Europea a que pertenecemos. En esta próxima década las instituciones oficiales, y no menos la iniciativa privada, deben aunarse para luchar conjuntamente, e implementarse los mecanismos de solidaridad intra y extra-regional ya existente. *Es preciso anteponer a cualquier otro interés, no ya el de la región como tal, sino el de sus sectores menos prósperos, pero a menudo más discriminados.* Si así lo hacemos, conseguiremos que quienes nos sigan en este camino, en este empeño, se sientan orgullosos de nosotros.

Bibliografía

- ALCAIDE INCHAUSTI, J. (1992): "Comportamiento económico de las CCAA españolas (1986-1991)", en *Papeles de Economía Española*, num.51.
- AURIOLES MARTIN, J.: "La economía andaluza en 1991. Nuevo cambio de rumbo hacia un futuro incierto", en *Papeles...cit.*
- CALVO PALACIOS, J.L. y PUEYO CAMPOS, A.: "La cartografía de potenciales poblacionales, como apoyo del análisis económico regional", en *Papeles... cit.*
- CASTRO, J. (1992): "Los andaluces somos cada vez más conservadores", en *Andalucía Actualidad*, núm. 1, 8 octubre (datos de encuesta de "Sigma 2").
- CAZORLA PEREZ, J. (1984): "Dependencia empresarial, nivel de industrialización y algunas actitudes de élites económicas en Andalucía", en *REIS*, núm. 26, junio.
- CAZORLA PEREZ, J. (1989): "Algunas claves sociopolíticas para la interpretación de las elecciones municipales de 10/6/1987, en el marco de la evolución electoral andaluza", en *Rev. de Estudios Regionales*, núm. 24, agosto 1989 (en colaboración con J. Montabes).
- CAZORLA PEREZ, J. (1990): "Andalucía en el contexto regional español: desigualdad y solidaridad", en el vol. coord. por J.Cano, *Comunidades Autónomas e instrumentos de cooperación interterritorial*, Parlamento de Andalucía, Sevilla, cap.I.
- CAZORLA PEREZ, J. (1990): *Sobre los andaluces*, Málaga, Agora.
- CAZORLA PEREZ, J. (1991): "Resultados electorales y actitudes políticas en Andalucía (1990-91)", en *REIS*, núm. 56, diciembre.
- CAZORLA PEREZ, J. (1992): "El funcionamiento de las instituciones", en el vol. coord. por R. Cotarelo *Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986)*, Madrid, CIS, capt. 13 (en colab. con A. Ruiz Robledo).
- CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS: Encuestas efectuadas y publicadas en diversas fechas.
- CIRES: Encuestas efectuadas y publicadas en diversas fechas.
- CORDERO MESTANZA, G. y DREVES, J.F.: "UEM: las transformaciones del territorio europeo. Integración económica y evolución de las disparidades regionales", en *Papeles*, cit.
- CUADRADO ROURA, J.R. y SUAREZ VILLA, L.: "Crecimiento económico y desigualdades regionales: el impacto de la infraestructura", en *Papeles*, cit.
- DELGADO CABEZA, M. (1992): "Andalucía en el camino de una integración desigual", preámbulo a la reedición de *Factores de la estructura socioeconómica de Andalucía Oriental*, de J. Cazorla Pérez, Universidad de Granada y Caja General de Ahorros.
- ESECA, (1992): *Informe económico financiero de Andalucía 1991*, Granada, Caja General de Ahorros.

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA, (1992): *Indicadores Económicos de Andalucía*, núm.3.

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA, (1990): *Anuario Estadístico de Andalucía*.

FERRARO, F.J. (1992): "Desarrollo y crecimiento económico andaluz", en *Boletín de Información Comercial Española*, núms.2330-2331, julio.

GARCIA SANZ, B. y MARTINEZ PARICIO, J. (1992): "Ruralidad y estrategias políticas en la España actual", en *Debate Abierto*, núm.7, primavera.

LOPEZ DE LA O, J.A. "¿Puede Andalucía competir?", en *Boletín...*, cit.

MARQUEZ GUERRERO, C. (1991): "Política regional europea y desarrollo regional en Andalucía: el caso de las infraestructuras de transporte por carretera", en *Revista de Estudios Regionales*, núm. 29, abril.

MARTIN ARMARIO, E. y otros: "Notas sobre la competitividad de la empresa industrial andaluza frente al reto del Mercado Unico", en *Boletín...*, cit.

MELLA MARQUEZ, J.M. "Las áreas deprimidas de España", en *Papeles*, cit.

MIRALLES, M. y SATUE, F.J. (1991): *Alfonso Guerra, el conspirador*, Edic. TH.

RODRIGUEZ, J.L. y MARCHENA, M.: "El turismo, como actividad estratégica de la economía andaluza", en *Boletín...*, cit.